

EDITORIAL

EL SALVADOR, JUICIO SOBRE EL AÑO 1978

1978 en El Salvador recibió una trágica herencia de 1977, como 1977 la había recibido a su vez del malogrado 1976. En lo socio-económico dramáticos niveles de pobreza, de mala distribución de la riqueza, de paro, de salarios bajos, de falta de salud y de vivienda. . . En lo político, anulación casi total de los cauces democráticos de participación política junto con represión violenta de las fuerzas que propugnan cambios profundos en la sociedad. Los males estructurales endémicos y gravísimos del país empeoraron coyunturalmente en 1977.

¿Qué han hecho en El Salvador las distintas fuerzas sociales y políticas durante 1978 ante esta situación?

En el campo de la economía, la orientación ha venido dada por la alianza de los capitalistas organizados con el aparato estatal y, dentro de éste, con la Fuerza Armada. Esta alianza que se consolidó con ocasión del fracaso de la Transformación Agraria, se ha mantenido y robustecido eficazmente. Incluso durante una aguda crisis de liquidez, que podría haber puesto al descubierto las cartas poco patrióticas que juega el gran capital. Los empresarios organizados han mantenido un control manifiesto de los centros de decisiones económicas del Estado y nada se ha decidido en este año que pudiera perjudicar los intereses inmediatos de los grupos predominantes en el empresariado. Ni siquiera se puede caracterizar este proceder como liberalismo económico, ya que el capital ha disfrutado de la intervención y protección económica del Estado, a la cual invoca constantemente y sin ningún pudor cuando se trata de asegurar y magnificar sus beneficios.

El Estado tiene, supuestamente, un plan general para enfrentar la situación económica. Se llama, ambiciosamente, Bienestar para todos. Este plan, que supone el abandono de las líneas directivas de la política económica de los tres gobiernos anteriores del PCN, pretende sacar del subdesarrollo al pueblo salvadoreño favoreciendo privilegiadamente a la "libre empresa" e impulsando concretamente las industrias de exportación. Aunque el plan representa un marco de referencia y un catálogo de proyectos sectoriales, no puede considerarse como un gran diseño de política económica ni un instrumento eficaz para desarrollar en el país un capitalismo moderno.





Si atendemos a medidas más concretas, hay que referirse a la política seguida con la comercialización del café basada en la especulación sobre aumentos de precios. Esta política no consiguió su objetivo —de hecho el café tuvo precios cada vez menores— sino que provocó graves consecuencias en la economía nacional, cuya liquidez monetaria depende en gran medida del sector agroexportador. Para paliar el problema el Gobierno decidió una nueva política monetaria con características bien significativas: reducción progresiva del control estatal sobre la política monetaria, apertura del mercado monetario salvadoreño a intermediarios financieros internacionales, elevación de las tasas de interés activo y pasivo, contratación de deuda externa con organismos privados por parte del Gobierno y estímulo a las empresas locales para que suscriban créditos directamente con bancos extranjeros.

Este recurso al mercado libre de capitales se debe, en parte, a que la captación de capital extranjero a través del BID, Banco Mundial, etc., se ha visto dificultada por la violación de los Derechos Humanos, que varios países, entre ellos Estados Unidos, consideraron práctica usual en El Salvador.

La empresa privada, por su parte, se ha retraído prácticamente de toda actividad de inversión, en vista del clima de inseguridad social y política. Es persuasión común que ha habido una gran fuga de capitales y es daño fácilmente comprobable la reducción neta de la inversión privada en el sector industrial. La industrialización del país se ha detenido y las esperanzas que de ella dependían se han marchitado. Todo ello significa que, en las actuales circunstancias, no se puede esperar de la iniciativa privada la respuesta adecuada a las graves necesidades del país. El Gobierno pensó que adscribiéndose a la idea de que favoreciendo la "gran" iniciativa privada todo el país mejoraría rápidamente. La "gran" iniciativa privada no ha respondido, pues su interés fundamental no es el bien general del país sino el interés reducido de su capital.

En el campo socio-político, el Gobierno ha respondido a la pesada carga que le dejó 1977 con gran volumen de represión dentro del marco ideológico de la Seguridad Nacional. Su política inmediata en este dominio parece estar regida por el errado diagnóstico de que la falta de paz y la alteración del orden público se deben exclusiva o principalmente a la acción premeditada de grupos subversivos y que, por tanto, aplastando a estos grupos se generará un clima de seguridad, que favorecerá el desarrollo económico y con éste la justicia social. Al menos en las declaraciones públicas oficiales hay un errado diagnóstico de las causas de la violencia y de los medios para superarla.

Consecuentemente con esta interpretación, la línea dura ha continuado un año más no sólo contra el terrorismo sino contra las fuerzas populares organizadas políticamente, especialmente contra campesinos agremiados y contra obreros sindicalizados. Sucesos como los de San Pedro Perulapán y Cinquera, por citar algunos de los más llamativos; la sistemática destrucción de las fuerzas sindicales por medios violentos que no se detienen ante el asesinato; la persecución de las organizaciones campesinas, la prepotencia de ORDEN en el campo, el ataque contra ANDES, etc., prueban a las claras que la represión continúa a cara descubierta. No todos estos sucesos tienen como responsable inmediato al Gobierno, pero sí a las fuerzas políticas en el poder.

La represión violenta, aunque no el control, ha disminuido en otros sectores que no pertenecen directamente a las clases populares; ha disminuido o tomado formas menos virulentas la presión sobre los políticos, los intelectuales y sobre los hombres de Iglesia, fuera de algunas fricciones ocasionales. En los últimos meses incluso se ha intentado crear un clima de diálogo con las fuerzas más moderadas de la oposición política.



Paradójicamente, y a pesar de su carácter anticonstitucional, la aplicación concreta de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público ha aliviado un tanto la situación de algunos presos políticos. En efecto, aunque la ley ha puesto un freno a las actividades democráticas y ha propiciado violencias extra-judiciales para forzar acusaciones, es de justicia constatar el hecho de que un número mayor de presos políticos que el acostumbrado han pasado a los tribunales y ninguno de ellos, hasta la fecha, ha sido penado gravemente. Trágica inconsecuencia que muestra lo mal que anda nuestra práctica jurídica y política.

Sin embargo, ni siquiera la existencia de la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, con todas las posibilidades que ofrece el Estado para luchar contra el terrorismo, ha sido capaz de sofrenar actividades ilegales del aparato del Estado. A estas fechas frente a los 91 consignados en virtud de la Ley hay al menos 104 desaparecidos, entendiéndolos por desaparecidos aquellos capturados por los cuerpos de seguridad. Han salido a la luz relatos espeluznantes de torturas y del estado lastimoso en que se tiene a los detenidos políticos; hechos que incluso han podido ser comprobados por comisiones internacionales imparciales.

Si pasamos la vista de las fuerzas dominantes a las clases dominadas puede apreciarse un proceso de crecimiento y maduración de las clases populares, gracias a la acción de diversas organizaciones. La deterioración progresiva de los niveles reales de vida de más del 40 o/o de la población ya severamente afectada por condiciones deshumanizantes, el empeoramiento debido a la inflación no menor de un quince por ciento, han sido suficientes para contrarrestar los efectos apaciguadores de mejoras nominales en los salarios mínimos y en los planes de inversión social. Contra esta cruda realidad de poco valen esfuerzos masivos de propaganda, a los que han contribuido generosamente las agencias de publicidad. Todo ello hace que, a pesar de la represión, se robustezcan las condiciones objetivas para un fortalecimiento de las organizaciones populares.

No hay datos fehacientes para asegurar si ha habido un acrecentamiento de las organizaciones populares en términos cuantitativos y/o cualitativos. No parece que la alianza obrero-campesina tenga de momento una entidad sólida. Por otro lado su emparejamiento con fuerzas no proletarias, como estudiantes y maestros, hace más difícil el trabajo que les sería propio. Es asimismo evidente la división y aun oposición entre los diferentes bloques de izquierda, lo cual no favorece su avance. Pero, si no puede medirse su fuerza, en cambio parece seguro que sigue en pie su ánimo y sus esfuerzos para mejorar, sobre todo en el campo, su organización y su capacidad de maniobra. Las peticiones que algunas de estas organizaciones campesinas hicieron con ocasión de las nuevas cosechas, a pesar de que no fueron escuchadas, muestran un alto grado de madurez y racionalidad.

Han seguido, sin embargo, los enfrentamientos entre estas organizaciones campesinas y sus oponentes de extrema derecha afiliados en ORDEN con su compleja estructura de organización paramilitar. Algunos ven en este enfrentamiento un principio de radicalización de la lucha, que pudiera convertirse en una guerra civil campesina latente y sorda con estallidos ocasionales. Sucesos como los de San Pedro Perulapán apuntarían en este sentido. Por otro lado, en las últimas fechas se ha presentado una nueva alianza obrero-campesina, la Central Nacional de Trabajadores (CNT), que responde a intereses menos polarizados y que se presenta a sí misma como la fuerza más numerosa y representativa en la línea de los trabajadores.

Los diferentes grupos guerrilleros, divididos entre sí, prosiguen sus actividades esporádicas de asesinatos, secuestros y destrucción de propiedades, sin que hayan sido golpeados seriamente por los cuerpos de seguridad. De orientación marxista-leninista se concibe cada uno de ellos como el núcleo fundamental de lo que sería un verdadero partido del pueblo. Cuenta cada uno con teóricos de distinta envergadura. Tras su actividad terrorista no es improbable que se esconda la pretensión dividida de ser las fuerzas hegemónicas de una presunta revolución radical. Su efecto más llamativo parece ser el retraer y dificultar un clima de seguridad para las inversiones privadas, sobre todo las transnacionales, a cuyos representantes parecen preferir. Tal vez pueda apreciarse un cierto cambio tanto en evitar las muertes como en no golpear a industrias, que no están en conflictos con sus trabajadores.

Los grupos sociales, no directamente implicados en la oposición fundamental de intereses materiales que caracteriza a nuestra sociedad, han mantenido en su mayor parte alianzas oportunistas con el capital, no sin temor —temor que ha podido ir creciendo durante el año— de hundirse con un barco que ni es suyo ni les es imprescindible para subsistir históricamente. Estos grupos no han contribuido a cambiar las cosas, pues bastante preocupados han estado por mantener sus niveles materiales de vida en presencia de la inflación y de la restricción de créditos. Otros grupos medios, partidarios en principio de un cambio fundamental de las estructuras sociales, han sido mantenidos a raya sea por miedo a la represión, sea por falta de cauces para proponer e intentar sus opciones.

Los partidos políticos no tienen en la actualidad posibilidades inmediatas de ofrecer estos cauces. El PCN, partido en el Gobierno, apenas actúa como partido político, dejando más bien sus funciones en manos de ORDEN. Los partidos de oposición, después que decidieron no participar en la última contienda electoral, trabajan preferentemente a nivel de dirigencia negociando posibles marcos de solución, pero sin fortalecer adecuadamente sus bases organizativas. Algunos de sus pronuncia-

mientos dan fe pública de su existencia: pero, aun en esta esfera, su actividad es mucho menos intensa que la de las organizaciones populares, que, al parecer, disponen de muchos más recursos materiales.

La Iglesia, por su parte, ha incidido poderosamente en el proceso político-social. Agudizada la división dentro de ella por lo que toca a qué hacer frente a tanta injusticia, su parte más capaz, más comprometida evangélicamente y con mejores recursos humanos, dirigida por Mons. Romero, se ha puesto de lleno en la línea de los derechos de los pobres y en defensa del pueblo oprimido. Esta Iglesia es hoy la fuerza más coherente a la hora de poner al descubierto las necesidades de las mayorías, a la hora de dar alguna esperanza a los oprimidos y a la hora de exigir proféticamente un cambio social. La Iglesia se ha hecho así creíble, tal vez la instancia más creíble del país; pero no toda la Iglesia sino aquella que se ha alineado con las necesidades del pueblo. Monseñor Romero es así no sólo el líder religioso más importante del país, sino también alguien en quien confían y creen los que más necesitan del cambio social. No es, sin embargo, un líder político que busque para sí o para la Iglesia el poder político, aunque el realizar su propósito de ponerse al lado del pueblo le ha llevado por fuerza a no estar al lado del Gobierno. La nominación que para el Premio Nóbel de la Paz han hecho de su persona 118 parlamentarios ingleses por estar contra la injusticia y contra la violencia ha supuesto un gran respaldo a su postura, duramente combatida dentro del país por quienes ven comprometidos sus intereses.

Las fuerzas culturales y educativas han seguido su curso normal, excepto en el caso de la Universidad de El Salvador al borde de la desintegración. Un pálido intento de revisión de la Reforma Educativa ha despertado algunas esperanzas. ANDES ha ido perdiendo su vigencia gremial y su peso político por su juego de politización y de alianzas. Ya no es aquella fuerza que podía poner en pie a una gran parte del magisterio nacional.

En el fondo de todo este conjunto de fuerzas sociales aparece la Fuerza Armada. Representa la garantía inmediata del orden establecido y sigue siendo una instancia indispensable en la orientación política actual del país. Ha respaldado las medidas del Gobierno —que nada puede hacer contra su voluntad corporativa jerarquizada— porque ha sido persuadido de la eficiencia técnica y la conveniencia estratégica de beneficiar incondicionalmente a la empresa privada como motor del desarrollo. Es de esperar que las crisis y las tendencias que se están manifestando en la economía le haga ver que su persuasión está objetivamente mal fundada, aunque de momento pueda resultarle la más cómoda. Los militares dan la impresión de haber abandonado el estilo en favor del cambio de hace dos años, por otro estilo con riesgos menores. Una campaña bien orquestada de los peligros que correría la institución armada como tal en una situación social y políticamente más democrática ha hecho recelosos a muchos militares ante propuestas vigorosas de cambio social. Pero, por otro lado, la Fuerza Armada debe comprender que el pueblo les atribuye la última responsabilidad respecto de las medidas represivas, de modo que se les hace cargar con conductas y decisiones, que probablemente no responden siempre a las intenciones de la institución armada.

¿En qué situación ha quedado el país tras esta actividad de sus fuerzas sociales?

La respuesta es clara: la situación ha empeorado, aunque en ese mismo empeoramiento aparecen algunos signos de esperanza. Precisamente porque la situación es mala y va empeorando, empieza a verse de nuevo con claridad que el cambio emprendido es equivocado y que es menester rectificar. El cambio de rumbo, propiciado por la crisis de la Transformación Agraria y que llevó a un endurecimiento de las fuerzas económicas y políticas, no está dando los resultados que se esperaban. La represión no ha logrado anular la subversión. Los extremos a los que llevó la represión levantaron indignación y repulsa no sólo dentro sino fuera del país y obligaron a rectificar.

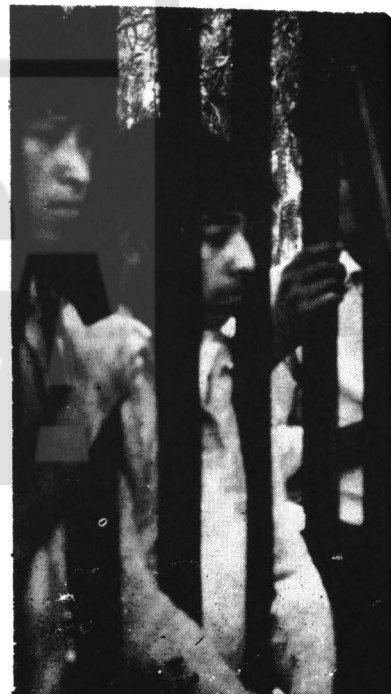


No es fácil disimular que se ha dado en este año un empeoramiento económico, al menos en el sentido de la distribución del producto nacional bruto. Cada vez son más en El Salvador los que viven peor. Por poner un ejemplo de gran alcance, los cientos de miles de salvadoreños, que van este año a las cosechas ganarán realmente menos de lo que ganaron el año pasado. Aunque se hayan construido viviendas, más salvadoreños se quedarán sin ellas. Más gente quedará sin trabajo. Lo que se hace, apenas logra cubrir las nuevas demandas, cuanto menos satisfacer las mucho mayores que ya había. Nadie que analice objetivamente la marcha económica del país puede pensar seriamente que vamos camino de resolver los problemas más acuciantes. No sólo los capitalistas sino también su capital consideran más seguros lugares en el extranjero, que aquel lugar que ellos mismos se construyeron en El Salvador a raíz de su enfrentamiento irracional contra la Transformación Agraria. Aunque todavía no hemos tocado el fondo del lodazal, el fondo de la desesperación económica y el fondo de la desesperación política, ya hacen sentir sus trágicos hedores.

Y, sin embargo, se ven posibilidades de reacción.

La coyuntura internacional parece propicia, al menos políticamente. Los niveles de desarrollo son en el país tan bajos y los de la represión tan altos, que resultan inconcebibles e intolerables para cualquier instancia moderadamente democrática, por más capitalista que sea. La campaña desigual de Estados Unidos en favor de los derechos humanos resulta hasta subversiva para El Salvador; tales son nuestros índices de comportamiento. Por varias razones algunos países del mundo occidental parecen habernos colocado en su punto de mira y están dispuestos a propiciar moderados cambios reformistas. A este propósito será de capital importancia el desenlace de la situación nicaragüense: si Nicaragua derrocara no sólo a Somoza sino al somocismo y se abriera en la línea democrática, que hoy propician para ella Costa Rica, Panamá y Venezuela, El Salvador podría verse impulsado en la línea de una apertura democrática, aunque hasta ahora está apoyando a Somoza. En este mismo contexto no puede pasarse por alto el posible significado del último golpe militar en Bolivia ni el trance por el que pasó la República Dominicana.

Por otra parte, la creciente preocupación de los países industrializados con la creación de un nuevo orden internacional está llevando a resaltar la parte tan esencial, que juegan las oligarquías económicas y los regímenes autocráticos que las respaldan, en mantener las condiciones de miseria de los grupos más pobres de los países subdesarrollados. Podemos así esperar, también desde este punto de vista, que los países democráticos serán cada vez menos tolerantes y menos cómplices de la forma primitiva, económica y política, del capitalismo que tenemos en El Salvador.



Aun entre las filas empresariales se destacan ya figuras importantes que, con el beneplácito del Gobierno, buscan alianzas para salir de la extrema polarización, en la que causas estructurales y un coyuntural abuso de su potencia, han dejado al país.

Pero no está en nada de ello la raíz más profunda de la esperanza. Esta raíz se hunde en la realidad de unas condiciones objetivas intolerables y en el surgir de unas condiciones subjetivas, que responden más ajustadamente a aquellas condiciones objetivas. Condición objetiva, sin embargo, y de primera magnitud, es la existencia del marco internacional que nos afecta; y esto tanto por lo que tiene de impulso posibilitante como por lo que tiene de límite cohibente, tanto por lo que permite hacer como por lo que impide proponerse. Sería un error desaprovechar ese impulso, como también lo sería lanzarse de inmediato a una carrera idealizante, que sólo puede llevar al fracaso. Se debe pretender todo lo que es posible, pero no se debe pretender de inmediato más que lo que es posible. Y en este punto cualquier equivocación puede suponer retrocesos graves y hasta la imposición de un régimen de terror.

Tenido esto en cuenta, puede afirmarse que uno de los mayores signos de esperanza está en el surgimiento organizado y responsable de organizaciones populares y movimientos sindicales, dispuestos a convertirse en sujetos de su propia historia y aun de la historia de El Salvador. Sería, sin embargo, una trágica equivocación el pensar que es posible o deseable a corto plazo la toma del poder político por parte de estas organizaciones populares. Su incipiente estado de estructuración, su fraccionamiento aun dentro de los marcos de la izquierda, su no reconocimiento legal y aun la positiva desconfianza ante su presunto extremismo idealista, hacen actualmente imposible el quemar etapas precipitadamente. Actualmente pueden desempeñar una función dinamizadora del proceso, pero no una función hegemónica. Una cosa es que deban existir y deban ser reconocidas legalmente, que deban pesar cada día más en la realidad económica y política del país y otra muy distinta que se hagan abrigar ilusiones sobre sus posibilidades reales inmediatas y sobre los límites de tolerancia que hay hoy en nuestro país. Su deseable reconocimiento legal sería mucho más factible, si cortaran todo tipo de relación con otras fuerzas, cuyo planteamiento está en algunos aspectos en oposición con la especificidad de las organizaciones campesinas y de los sindicatos obreros.

Si las organizaciones populares no están en capacidad de tomar el relevo democrático, deben aunarse esfuerzos para buscar por la vía de elecciones una salida a la situación desesperada del país. Es cierto que no puede haber mucha confianza en un proceso democrático de elecciones, después de las recientes experiencias pasadas. Por eso, antes de llegar a ellas debe avanzarse sustancialmente en el proceso de la apertura democrática. No ol-



videmos que hoy tenemos una Asamblea Legislativa prácticamente unipartidista sin miembro alguno de los partidos moderados de oposición. Hoy tenemos una Ley de Defensa y Garantía del Orden Público, que frena los mejores esfuerzos de acción democrática. Hoy tenemos un ambiente de represión y control. Hoy tenemos conductas ilegales incluso por parte de algunas autoridades, que no cumplen ni siquiera con los preceptos legales en lo que toca a capturas, desaparecimientos, malos tratos, presentación oportuna de los reos ante los tribunales. . . Sólo la mejora sustancial de esta infraestructura democrática daría un mínimo de confianza para unas elecciones democráticas.

Las fuerzas más radicalizadas no tienen fe en las virtualidades de un proceso democrático. Las de la derecha, porque piensan que la más mínima concesión a las necesidades y exigencias populares supondría el comienzo de un proceso en el que naufragarían sus privilegios; las de la izquierda porque juegan idealística y voluntarísticamente el peligroso juego del todo o nada, sin percatarse de que el todo ha de conseguirse procesualmente. Pero estas fuerzas radicalizadas son una parte mínima del país, a pesar de que se autoproclamen como las representantes del pueblo y del bien general. Hay en El Salvador una gran masa de gente laboriosa, eficaz, capaz de luchar sacrificada y esperanzadamente por un futuro mejor. Es menester despertar y comprometer socialmente a esta gran masa, que lleva sobre sus hombros el peso del país, porque es la depositaria no sólo de los derechos ciudadanos sino también de las mejores posibilidades de transformación.

¿Qué se puede esperar y desear de 1979?

Obviamente no todo lo que sería necesario para comenzar la reconstrucción del país. Un año representa apenas unos minutos históricos en la vida de un pueblo. Lo que sí puede esperarse es un paulatino cambio de rumbo.

Ante todo, es importante no empeorar la situación. Que unos no trabajen por agudizar la subversión y que otros no se

dediquen a robustecer la represión. En definitiva, que no se busque la solución por el camino de la violencia. La repetida frase de que la violencia engendra violencia es un hecho comprobado de nuestra vida cotidiana. A partir de una violencia institucional surge una violencia subversiva, que a su vez provoca una violencia represiva. Este es un problema difícil pero en definitiva periférico respecto de la marcha social del país. No parece posible por ahora que la violencia subversiva ponga en jaque y amenace el orden constitucional. De ahí que no sería justo ni acertado que el poder del Estado tomara medidas que, so pretexto de frenar el terrorismo, implicaran un clima de represión. El problema fundamental del Estado no es el terrorismo, aunque éste tenga su importancia; el problema es el de hacer desaparecer la violencia institucional mediante la aceleración de la participación democrática de la mayoría del pueblo en los bienes políticos y en los bienes económicos del país.

No repetiremos aquí lo que sobre la apertura democrática dijimos en nuestro editorial del mes de septiembre. Subrayaremos tan sólo que se trata de un proceso, al que debe coadyuvar la opinión pública; hay que hacer opinión pública en favor de una apertura democrática, para lo cual no contamos desdichadamente con buenos medios de comunicación social. Se trata asimismo de abrir un proceso de negociación: es difícil por el momento que se inicie la negociación entre las fuerzas extremas y extremistas del país; pero, si en la negociación inicial entre fuerzas no radicalmente opuestas se logran avances importantes, si quiera en la democratización política del país, entonces será posible avanzar hacia cuotas más altas de diálogo y de participación. De poco servirá en este proceso la ira o el resentimiento; han de asilarse los airados y resentidos, si es que han de darse pasos racionales. Y estamos hablando en términos estructurales, aunque las palabras puedan sonar como psicológicas. No quisiéramos adelantar temas concretos de este diálogo, pues es en el diálogo donde deben descubrirse los temas que son inicialmente aptos para iniciar el proceso.

La resolución del problema de la Universidad de El Salvador podría ser un campo de prueba del alcance de la apertura democrática. El estado caótico, en que se encuentra, muestra lo errado de quienes decidieron resolver los problemas universitarios poniendo al frente de la institución a reaccionarios inconscultos, amigos más de la represión que de la apertura racional y democrática. La Universidad de El Salvador ha sido llevada al borde de la descomposición por el mismo tipo de planteamiento que ha llevado al país al borde de la descomposición. Y, como en el caso del país, ha sido la misma descomposición interna de la Universidad lo que ha forzado a buscar nuevas soluciones. Podría experimentarse en la Universidad lo que se propone como nuevo modelo de conducción del país.

*Importante papel en la solución de los problemas del país le compete a la Iglesia. La Iglesia debe convertirse cada día más en instancia que hace posible la esperanza de quienes, dada su situación, sólo sentirían desesperanza. La Iglesia en El Salvador puede seguir despertando esperanza. Por eso estamos en favor de aquella parte de la Iglesia salvadoreña que lucha esperanzadamente por un futuro mejor para el pueblo salvadoreño y que trabaja por construir la paz laborando en favor de la justicia. No puede negarse que la Iglesia, una parte importante de ella, ha ganado creciente credibilidad con el pueblo que sufre y trabaja. No es ella la que está creando tensiones innecesarias sino la que está buscando dar salida a los clamores del pueblo y la que está animando a buscar, por medios no violentos, la solución. Esta historización de la Iglesia, encarnación de su misión en la realidad histórica que le ha tocado vivir, es hoy un aporte indiscutible al proceso que está viviendo El Salvador. Si toda la Iglesia salvadoreña, especialmente toda su jerarquía, se adunara en este sentido de la misión, su eficacia sería mucho mayor. Para mantener su eficacia, es necesario que la Iglesia no se parcialice partidísticamente: debe estar por igual a favor de todo lo que vigorice los derechos populares y en la medida en que los vigorice; debe estar por igual en contra de cualquier violación de los derechos humanos. Su vocación cristiana exige que se ponga del lado de los necesitados y oprimidos para, desde ellos, luchar y trabajar por la salvación de todos, pero no por eso debe parcializarse por algunos de los grupos o por algunas de las soluciones, que se dan actualmente en el país. Sería un error que la Iglesia o algunos de sus miembros más llamativos, como son los sacerdotes y los religiosos, se decantaran en favor exclusivo y excluyente de determinados mecanismos de acción política. **Intelligenti pauca, a buen entendedor pocas palabras.***

Sólo si se va ganando terreno a la desesperanza y a la desesperación, sólo si se comienza a construir algo distinto sobre bases democráticas, se podrá comenzar a pensar en un nuevo plan económico, que sea de utilidad para el país y permita avizorar el día en que dejemos de empeorar para comenzar a mejorar. Mientras tanto el Gobierno debe arbitrar aquellas medidas, que alivien la situación de las masas trabajadoras y, sobre todo, de las masas sin trabajo. No es sana política nacional el entreguismo al gran capital. Pero el remedio contra este tipo de políticas tiene que pasar por un mínimo de democratización y de participación política.

Estas son algunas de las lecciones que 1978 deja a 1979. Reflexionemos sobre ellas y emprendamos acciones consecuentes. No somos un pueblo rendido y postrado, somos un pueblo en pie, que lucha. Ojalá no se equivoquen en esto los dirigentes políticos y económicos. Si no se da salida democrática a esta capacidad de lucha, el horizonte de El Salvador puede teñirse de sangre.

14 Diciembre de 1978.